

CONDICION VEINTIDOS

DE LA SUBASTA

Por la inserción de edictos y anuncios oficiales que sean de pago, se satisfará por cada línea 25 céntimos de peseta, haciéndose la inserción precisamente en el tipo de letra que señala la condición 19.

BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA DE ORENSE

ADVERTENCIA.—Las leyes obligarán en la Península, Islas adyacentes, Canarias y territorios de Africa sujetos a la legislación peninsular, a los veinte días de su promulgación, si en ellas no se dispusiere otra cosa. Se entiende hecha la promulgación el día en que termine la inserción de la ley en la *Gaceta*.—(Artículo 1.º del Código civil)

PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA

CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el Rey y la Reina Regente (Q. D. G.), y Augusta Real Familia continúan en el Real Sitio de Aranjuez sin novedad en su importante salud.

Gaceta núm. 144

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

REALES ORDENES

La Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado emite, con fecha 8 del corriente mes y año, el siguiente dictamen: Excmo. Sr.: La Sección ha examinado el expediente relativo a la suspensión del acuerdo en que la Comisión provincial de Granada suprimió el destino de Oficial de la clase de terceros de la Sección de Contabilidad que servía a las órdenes inmediatas del Gobernador el empleado a D. Luis Ramírez de Castro. Resulta que la Diputación provincial de Granada, en sesión fecha 9 de Abril de 1890, creó una plaza de Oficial de la clase de terceros con 2.500 pesetas de sueldo en el Negociado de Cuentas, con destino al Gobierno civil y confirió el empleo a D. Luis Ramírez de Castro, que como temporero venía desempeñando el servicio.

Mas en 21 de Febrero próximo pasado la Comisión provincial, cumpliendo, según afirma lo acordado por la Diputación en 8 de Enero anterior respecto a la plantilla del personal, y reformas económicas que juzgase necesarias previa la declaración de urgencia para deliberar, suprimió once empleos, entre los que figura el de D. Luis Rodríguez Castro, a quien así como a los demás cesantes su pen-

dió de empleo y sueldo sin perjuicio de lo que la Diputación resolviera al darle cuenta de lo acordado en la primera sesión que celebrara.

En 26 del mismo mes el Gobernador decretó la suspensión de dicho acuerdo en la parte relativa a la supresión del empleo de Ramírez Castro, en virtud de los artículos 28 y 79 de la Ley Provincial, fundándose en que «entre los servicios que las leyes encomiendan a las Autoridades, merece suma preferencia el examen e inspección de las cuentas municipales, por ser la contabilidad local la base de la gestión administrativa de los intereses de los Municipios»; que al efecto, la Real orden de 12 de Diciembre de 1877 y las circulares de 10 de Julio y 29 de Diciembre de 1886 previnieron a las Diputaciones que facilitasen a los Gobernadores los medios necesarios para atender a la revisión y examen de las cuentas municipales, que este servicio no podría cumplirse sin un personal idóneo, por lo que es práctica constante que las Diputaciones pongan varios Auxiliares a disposición de los Gobiernos de provincias, en vista del escaso número de empleados con que cuentan con arreglo al presupuesto general del Estado; que a este fin la Diputación provincial de Granada había encargado el empleo de que se trata a D. Luis Ramírez, que lo desempeñó primeramente como temporero con la gratificación de 2.000 pesetas, y después como Oficial de la clase de terceros, con el sueldo de 2.500, y siempre con notoria aptitud y fidelidad por lo que hacía pocos días que había sido propuesto a la Corporación y al Ministerio del digno cargo de V. E. para una recompensa que sin perjuicio de las atribuciones que el art. 74 confiere a las Diputaciones, no ha debido suprimirse dicha plaza sin consultar a su Autoridad, y que la suspensión de empleo y sueldo sólo procede por justas causas.

Contra la referida providencia interpuso recurso de alzada en 5 de Marzo la Comisión provincial, exponiendo que, no desconociendo las consideraciones generales alegadas por el Gobernador, la importancia del examen de las cuentas municipales y el encargo que al efecto hizo la Real orden de 31 de Mayo de 1886 a las Diputaciones a los fines del art. 165 de la Ley Municipal, abundando en las mis-

mas razones, ha venido atendiendo a la necesidad, dotando el personal suficiente las dependencias de la Contaduría provincial, y destinando de una manera permanente el que, de acuerdo con la Autoridad superior de la provincia, se ha conceptuado preciso para ello, en lo que ha rebasado los límites de las disposiciones vigentes, puesto que, según lo que previene la Real orden de 12 de Diciembre de 1877, que sirve de base a la actual organización, los empleados de Contabilidad dependientes de las Corporaciones provinciales, sin desatender sus propias y directas obligaciones, deben auxiliar en el servicio a los Gobernadores, compartiendo con los dependientes de los mismos en horas extraordinarias los trabajos referentes al examen y censura de dichas cuentas; que no debe olvidarse que hoy el examen de las cuentas, y por tanto el mayor trabajo, está encomendado a las Diputaciones, y a los Gobernadores sólo les incumbe la revisión y aprobación de las mismas; que las reformas económicas, acordadas en beneficio de los intereses provinciales, no perjudican a la Administración; que la citada Real orden y las circulares de 10 de Julio y 29 de Diciembre de 1886 se limitan a prevenir que las Diputaciones auxilien a los Gobernadores con el personal necesario para el examen de las cuentas, sin fijar el número de los funcionarios que ha de destinarse a las Secretarías de los Gobiernos de las provincias; que la suspensión del acuerdo no se justifica, puesto que, en cuanto a la supresión de los demás empleos, nada ha opuesto el Gobernador, que con arreglo a los artículos 79, 84 y 101 de la Ley Provincial, no ha debido decretarse la suspensión del acuerdo; que el asunto es de la competencia de la Diputación y de la Comisión provincial, según los artículos 74 y 98, números 1.º, 3.º y 4.º; que no habiéndose atemperado a las prescripciones legales la resolución apelada, debía ésta ser revocada, declarando firme y válido lo acordado.

Al remitir el recurso de alzada con todos los antecedentes que tuvieron entrada con fecha 13 de Marzo último en el Ministerio, el Gobernador reprodujo los razonamientos que antes expuso, y además alegó que no es cierto que la Real orden de 12 de Diciembre establezca que los empleados de las

SE PUBLICA TODOS LOS DIAS

EXCEPTO LOS DOMINGOS

PRECIO DE SUSCRIPCION

Un trimestre dentro y fuera de la capital. 5 ptas.
Números sueltos. 0'25

Se admiten suscripciones en la Imprenta LA POPULAR, Orense.

Diputaciones ayuden al personal de los Gobiernos civiles en horas extraordinarias; que la Comisión provincial ha faltado a las citadas disposiciones, abusando de las facultades que determina el art. 98, sin causa ni motivo alguno puesto que la plaza de que se trata no es de las que habrá de suprimirse por el proyecto de economías indicado por la Real orden de 12 de Julio último, y faltando solo un mes para que la Diputación se reuniera por ministerio de la ley, no se justificaba la urgencia, mediante la que tomó el acuerdo, que no suspendió en todas sus partes por una excesiva consideración a sus actos, que según las Reales ordenes de 13 de Noviembre de 1872, 8 y 23 de Junio de 1874 y 11 de Abril de 1876, las Diputaciones no pueden delegar en las Comisiones permanentes las funciones que les son propias y exclusivas, tal como nombramientos y separación de los empleados; que tratándose de un empleo necesario y de carácter permanente y de un empleado que reunía las condiciones de aptitud, honradez y fidelidad que pudieran desearse, y que estaba destinado a las órdenes del Gobierno civil, no debió ser separado sino de acuerdo con el Gobernador, y que, ya que la Comisión había suprimido aquellos empleos por razón de economías bien pudo limitar el número de sus sesiones en vez de celebrar estas diariamente, y así tal vez tendría más recursos con que pagar las tres mensualidades que se adeudaban al personal, y los establecimientos de Beneficencia estarían mejor atendidos.

La Dirección general de Administración local, de conformidad con la nota del Jefe de la Sección segunda, Negociado primero, en 21 de Marzo informó que en virtud de lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley Provincial, debe dejarse sin efecto la suspensión del acuerdo, oyendo antes el dictamen de la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado, para lo que se ha remitido el expediente a la misma con Real orden recibida en 6 del mes que rige.

Vistas las citadas reales ordenes y las disposiciones de los artículos 150, 165 y 167 de la Ley Municipal, 14, 19, 20, 26, 28 núm. 4.º, 55, 61, 74, 79, 81 al 86, 92, 98, 101, 104, 109, 120 y 130, párrafo tercero de la Ley Provincial, e instrucción de 27 de Abril de 1875

sobre el ejercicio del protectorado en la Beneficencia.

Considerando que la Comisión provincial de Granada ha tomado el acuerdo de que se deja hecho mérito con notoria incompetencia y perjuicio del servicio de que estaba encargado el Oficial don Luis Ramírez Castro, puesto que sin consultar al Gobernador acerca de la supresión de un empleo de «carácter permanente» según «la misma confiesa, y necesario á los fines de los artículos 150, 165 y 167 de la Ley Municipal, y 26 y 28 de la Provincial, é infringiendo los artículos 74, 98 y 104 de la misma y las prescripciones de dichos circulares, se ha abrogado las atribuciones que exclusivamente corresponden á las Diputaciones, sin que el acto pueda justificarse por razón de una urgencia supuesta, una vez que en cumplimiento de los artículos 55 y 61 podía esperar á la próxima reunión semestral de la Diputación, ó haber podido que esta celebrase sesión extraordinaria para que deliberase sobre una materia tan grave como lo es toda alteración de los presupuestos;

Considerando que aun las mismas Diputaciones dentro de sus atribuciones han de observar lo establecido en las leyes respecto de los nombramientos y separaciones, arreglo de las plantillas y determinación del sueldo de sus empleados y dependientes, pagados de fondos provinciales.

Considerando que bajo la denominación genérica de leyes no solo se comprenden éstas, sino también los reglamentos, Reales decretos, instrucciones, circulares y Reales órdenes dictadas de conformidad con las mismas por el Gobierno, en uso de su potestad reglamentaria, y en tal concepto, aunque la Comisión provincial de Granada hubiera estado autorizada por la Diputación para ejecutar desde luego la reforma, no habría podido negar el auxilio que preceptúa la circular de 29 de Diciembre de 1886 suprimiendo el empleo que más necesitaba el Gobernador para inspeccionar la Hacienda municipal, que tanto afecta al bienestar de los pueblos, de las provincias y del Estado;

Considerando que el Ministerio de la Gobernación es el único encargado de que por las Corporaciones provinciales no se infrinjan la Constitución y las leyes;

Y considerando que al Protectorado incumbe velar muy especialmente por la conservación y mejora de los establecimientos benéficos;

La Sección opina que procede desestimar el recurso de alzada, revocar en todas sus partes el acuerdo tomado por la Comisión provincial de Granada en 21 de Febrero último, referente á la reforma de la plantilla del personal de la Diputación, sin perjuicio de lo que ésta estime conveniente resolver por sí misma, y con arreglo á las leyes respecto de sus empleados, y encargar al Gobernador que en breve gire una visita de inspección á los establecimientos de Beneficencia y dé cuenta documentada del resultado á la Dirección general de Beneficencia y Sanidad, para lo que en su caso hubiere lugar.

Y conformándose S. M. el Rey (que Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el preinserto dictamen, se ha servido disponer como en el mismo se propone;

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Mayo de 1891.—Silvela.—Sr. Gobernador de la provincia de Granada.

Gaceta núm. 172.

Pasado á informe de la Sección de

Gobernación y Fomento del Consejo de Estado el expediente relativo á la suspensión del Ayuntamiento de esa capital, decretada por V. S.; dicho alto Cuerpo ha emitido, con fecha 2 del actual, el siguiente dictamen:

Excmo. Sr.: La Sección ha vuelto á examinar el expediente relativo á la suspensión del Ayuntamiento de Córdoba, decretada en 6 de Abril por el Gobernador de aquella provincia.

De las certificaciones que constituyen el expediente, resulta: que en 30 de Junio último el Ayuntamiento celebró sesión secreta para resolver acerca de una cuenta de ingresos, que por valor de 937 pesetas 25 céntimos presentó un hijo del Concejal D. Rafael Arroyo; que el Inspector de vigilancia D. José Martínez, al visitar un local destinado á cebadero, sito en el campo de San Antonio de la propiedad de D. José Barca, encontró 800 sacos de maíz y 23 de harinas, en tanto que en el mismo día 26 de Septiembre de 1890, el visitador del resguardo de consumos manifestó al Oficial Jefe de la Sección central del Impuesto que en aquel mes no había atravesado especie alguna sin adeudar derechos, y el Jefe de la estación de los Ferrocarriles Andaluces contestó al oficio núm. 1.587, que D. José Barca había recibido durante el expresado mes 665 sacos de maíz en tres partidas, de las que en los días 6 y 29 había retirado dos, una procedente de Paradas á Córdoba, y otra de Torres á Cabrera, números 425 y 123, de 132 y 234 sacos, respectivamente; que el Oficial Jefe de la referida Sección central requerido por D. Vicente Salas, oficial del Gobierno civil, certificó en 30 de Septiembre que, practicadas las liquidaciones de las cuentas corrientes de los depósitos de los cosecheros y comerciantes que se hallaban en nombre de los Concejales don Félix Castro, D. José Alfaya D. Gregorio García, D. Rafael Salmas y don José Gutiérrez, resultaron conformes las operaciones con los libros y documentos de carga y data, examinado el libro «registro de ganados», existentes en el rúdio, solo que aparecían en él los nombres de tres ganaderos, mientras que en el repartimiento de la contribución territorial y pecuaria, obrante en la Administración de Contribuciones de la provincia, figuraban 189 ganaderos; que con motivo de un recurso de doña Carmen Lara contra la ejecución de unas obras en la casa número 46 de la calle de San Pablo se descubrió que en las oficinas municipales se había estraviado la instancia de la interesada; que prescindiendo de lo preceptuado en el art. 18 de la ley de 13 de Abril de 1887, el Ayuntamiento ha llevado á cabo obras de importancia que ascienden á 183.849 pesetas 11 céntimos; que el Gobernador nombró á sus Oficiales con el carácter de Delegados, no para inspeccionar la Administración municipal sino para descubrir y perseguir algunas de las defraudaciones que le habían denunciado; que de la comparación de las certificaciones expedidas por la Alcaldía con las actas de los aforos que se practicaron, suscritas por los interesados, resultó que el Teniente de Alcalde D. José Alfaya, Presidente de la Comisión de Consumos y dueño de algunas tabernas que se surten de su depósito, adeudaba los derechos de 19.087 litros de vino y 210 de vinagre; el Concejal D. Santos Viguera adeudaba los derechos de 552 kilogramos de alverjones, 806 litros de vinagre, 14 de aceite, 5.743 de cebada, 7.224 de harina, 14 de carne y 3.293 de maíz aparte de la defraudación al impuesto de 30 kilogramos de queso, 1.140 de garbanzos, 2.772 de habas y 707 de alpiste, y D. José Bar-

ca adeudaba otros derechos por especies análogas; que el Alcalde, lejos de poner correctivo á tales hechos, en 5 de Noviembre se dirigió al Gobierno de la provincia, pidiendo quedara sin efecto lo actuado, por considerarlo depresivo á su autoridad y no haberlo dado antes conocimiento de la misión que llevaban los Delegados; que en 13 de Enero último, el Visitador de Consumos presentó unos volantes y una denuncia respecto de que en el día 5 se habían detenido en el Fielato del Pretorio dos corambes de aceite, sin que se hubiera dado parte del hecho á la Administración de Contribuciones ni devuelto la especie, sin embargo de lo que se hizo pagar 250 pesetas al dueño de dicha especie; que el Ayuntamiento no había cumplido lo dispuesto en las Reales órdenes de 7 de Enero de 1884, 20 de Octubre de 1885, 21 de igual mes de 1886 y 21 de Febrero último, que mandaron pagar lo que la Corporación debía á la empresa del gas, por lo que fueron multados todos los Concejales; y que en vista de todo lo expuesto el Gobernador suspendió en sus cargos á los Concejales del Ayuntamiento de Córdoba, exceptuando de la corrección al Marqués de Villaverde, D. Rodolfo del Castillo y D. Gregorio García á quienes no alcanzaba la responsabilidad, puesto que no habían asistido á la mayor parte de las sesiones, por cuya falta tampoco había procedido el Alcalde como previene la ley.

Remitido el expediente á informe de esta Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado, en 24 de Abril informó que, sin perjuicio de que se subsanasen algunos defectos que se notaban en la instrucción de las actuaciones y se citase á los interesados para oír sus descargos y resolver lo que procediera sobre la suspensión gubernativa, debían reanudar los antecedentes á los Tribunales, por la gravedad que revestían algunos de los mencionados hechos, y de conformidad con lo consultado, se resolvió en Real orden fecha 16 de Mayo próximo pasado.

Cumplido lo dispuesto en el art. 41 del reglamento de 22 de Abril de 1890, el Gobernador remitió el expediente en 23 del expresado mes al Ministerio del digno cargo de V. E. exponiendo que, á pesar de haber sido citados los Concejales suspensos, solo tres examinaron las actuaciones, y ninguno ha alegado razón alguna en descargo de las faltas que se les imputan:

Vistos los artículos 180, 181, 182, 183, 189 y 191 de la ley Municipal;

Considerando que los hechos relacionados respecto de los que nada se ha alegado en contrario por los suspensos, justifican la providencia del Gobernador, puesto que el desorden, negligencia y abusos de la Administración municipal del Ayuntamiento de Córdoba exigen la imposición del mas severo correctivo que la ley autoriza, sin perjuicio de lo que haya lugar en justicia;

Y considerando que el plazo de la suspensión quedó interrumpido con arreglo al art. 36 de la ley de 26 de Junio de 1890;

Opina la Sección que procede confirmar la suspensión de que se trata y encargar al Gobernador que por los medios que la ley le otorga haga cumplir á los otros Concejales el deber que tienen de asistir á las sesiones de la Corporación si continúan perteneciendo á ella.

Y conformándose S. M. el Rey (que Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos con

devolución del expediente. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Junio de 1891.—Silvela.—Sr. Gobernador de la provincia de Córdoba.

Gaceta núm. 174.

Pasado á informe de la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado el expediente relativo al recurso interpuesto por D. Miguel Pérez Caballero y otros contra los acuerdos de esa Comisión provincial; dicho alto Cuerpo ha emitido, con fecha 12 de Mayo último, el siguiente dictamen:

Excmo. Sr.: La Sección ha examinado con el expediente que le acompaña el recurso interpuesto por Don Miguel Pérez Caballero y otros contra los acuerdos de la Comisión provincial de Logroño, estimando legal la reunión últimamente celebrada por el Ayuntamiento y los Comisionados de la Junta general de escrutinio de Fuenmayor, y nulas las elecciones municipales celebradas en dicho punto en 1.º de Diciembre de 1889.

En 11 de dicho mes solicitó Don Abundio Saenz de Cabezón la nulidad, fundado en que se habían elegido seis Concejales en vez de cinco que eran los que correspondían, con arreglo al censo de 1877, aplicable al caso, pues el de 1887, en que constaba aumentada la población de Fuenmayor, no tuvo carácter oficial hasta el Real decreto de 27 de Junio de 1889, y porque, según la Real orden de 27 de Noviembre del mismo año, no debe aumentarse el número de Concejales aunque haya aumentado el de habitantes; y finalmente, porque, con arreglo á la de 29 de Diciembre de 1887, es nula toda elección de distinto número del que corresponda. El Presidente decidió el empate ocurrido entre los Comisionados, declarando válida la elección, apoyado en que se había consultado antes al Gobernador, que contestó que debían atenerse al censo de 1887, y porque la primera de las Reales órdenes indicadas no se publicó en la *Gaceta* ni en el *Boletín*.

Habiéndose alzado Saenz de Cabezón á la Comisión provincial, ésta apoyada en que la Mesa la constituían seis Interventores, y que no habían votado más que cuatro, devolvió el expediente para que se reunieran todos, y habiéndolo efectuado votaron por mayoría la nulidad de la elección. Los hoy reclamantes tacharon ante la Comisión provincial al hermano y al padre político de Saenz de Cabezón, que entendían debían ser sustituidos por los suplentes caso de que no se creyera que con arreglo al art. 80 de la ley Electoral y tratándose de una sola Mesa bastaba la asistencia de cuatro.

La Comisión provincial ha estimado válida esta segunda reunión por creer que la única tacha que podría ser procedente sería la del hermano de Saenz de Cabezón, y aunque quedaria mayoría á favor de la nulidad y ha declarado ésta por conceptuar aplicable el censo de 1877 y citando las Reales órdenes que el que presentó las protestas.

Esta Sección conceptúa innecesario entrar á apreciar si á la junta de Ayuntamiento y Comisionados debieron asistir todos los Interventores ó si con arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 de la ley Electoral de 1870, era suficiente la concurrencia de cuatro, puesto que ha ocurrido un hecho mas grave que en su concepto anula la elección, y es el que se refiere á haberse votado seis Concejales en vez de cinco.

Es indudable que, como ya se ha

Indicado en otros informes, no estando aun rigiendo el Censo de 1887 al formarse las listas para la elección de que se trata, que era la que había de celebrarse en Mayo de 1889, debió aplicarse el de 1877, con arreglo al cual solo correspondía elegir cinco Concejales, y es inconcuso asimismo que conforme a la Real orden de 29 de Diciembre de 1887, recaída de acuerdo con el informe de esta Sección, en el expediente de elecciones del Ayuntamiento de Ricote (Murcia), es nula toda elección de distinto número de Concejales del que corresponda;

En este concepto pues,

La Sección opina que procede que se confirme el acuerdo de la Comisión provincial de Logroño, en que anuló las elecciones municipales celebradas en el Ayuntamiento de Fuenmayor en 1.º de Diciembre de 1889, y que previos los trámites legales se proceda a la convocatoria y celebración de otras nuevas.

Y conformándose S. M. el Rey (que Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos, con devolución del expediente. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Junio de 1891.—Silvela.—Sr. Gobernador de la provincia de Logroño.

MINISTERIO DE LA GUERRA

REALES DECRETOS

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrar Gobernador militar de la provincia de Santander y Plaza de Santoña al General de Brigada D. José Saenz de Aizpuru y Risueño, actual Jefe de Brigado del distrito militar de Burgos.

Dado en Aranjuez á veintiuno de Junio de mil ochocientos noventa y uno.—Maria Cristina.—El Ministro de la Guerra, Marcelo de Azcárraga.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrar Jefe de Brigada del distrito militar de Burgos General de Brigada D. Fernando de Vivar y Gazzino, electo para igual cargo en el distrito de Galicia.

Dado en Aranjuez á veintiuno de Junio de mil ochocientos noventa y uno.—Maria Cristina.—El Ministro de la Guerra, Marcelo de Azcárraga.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrar Jefe de Brigada del distrito militar de Galicia al General de Brigada D. Blas Sanchez Abellan.

Dado en Aranjuez á veintiuno de Junio de mil ochocientos noventa y uno.—Maria Cristina.—El Ministro de la Guerra, Marcelo de Azcárraga.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal estado de salud, ha presentado el General de Brigada D. Cayetano Melguizo y Gonzalez del cargo de Gobernador militar de la provincia de Salamanca; quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado, y proponiéndome utilizar oportunamente sus servicios.

Dado en Aranjuez á veintiuno de Junio de mil ochocientos noventa y uno.—Maria Cristina.—El Ministro de la Guerra, Marcelo de Azcárraga.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrar Gobernador militar de la provincia de Salamanca al General de Brigada D. Pedro Gonzalez Montero.

Dado en Aranjuez á veintiuno de Junio de mil ochocientos noventa y uno.—Maria Cristina.—El Ministro de la Guerra, Marcelo de Azcárraga.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrar Gobernador militar de la isla de Gran Canaria Manuel

Aranjuez á veintidos de Junio de mil ochocientos noventa y uno.—Maria Cristina.—El Ministro de la Guerra, Marcelo de Azcárraga.

En consideración á lo solicitado por el Capitan de navio de primera clase D. José Navarro y Fernandez, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y militar Orden de San Hermenegildo;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día 4 de Marzo del corriente año, en que cumplió las condiciones reglamentarias.

Dado en Aranjuez á veintiuno de Junio de mil ochocientos noventa y uno.—Maria Cristina.—El Ministro de la Guerra, Marcelo de Azcárraga.

En consideración á lo solicitado por el Ingeniero Inspector de primera clase de la Armada D. Bernardo Berro y Ochoa, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y militar Orden de San Hermenegildo;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día 8 de Enero del corriente año, en que cumplió las condiciones reglamentarias.

Dado en Aranjuez á veintiuno de Junio de mil ochocientos noventa y uno.—Maria Cristina.—El Ministro de la Guerra, Marcelo de Azcárraga.

Gaceta núm. 172.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

REALES DECRETOS

Vista la exposición elevada por la Sala de lo criminal de la Audiencia de Valencia en que, usando de las facultades que le concede el art. 2.º del Código, propone que las tres penas de diez años y un día de presidio mayor impuestas á Ignacio Balbás Pla en causa sobre varios delitos de falsedad, se comuten por otras tres de cuatro meses de arresto cada una;

Considerando que, atendido el escaso lucro obtenido por el reo, de la rigurosa aplicación de las prescripciones legales, resulta en este caso notablemente excesiva la pena;

Teniendo presente lo dispuesto en la ley provisional de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejercicio de la gracia de indulto;

Tomando en consideración la propuesta de la Sala Sentenciadora; de acuerdo con lo consultado por el Consejo de Estado y con el parecer de mi Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en conmutar las tres penas de diez años y un día de presidio mayor á que fue condenado Ignacio Balbás Pla, por otras tres de un año de presidio correccional cada una.

Dado en Aranjuez á siete de Junio de mil ochocientos noventa y uno.—Maria Cristina.—El Ministro de Gracia y Justicia, Raimundo Fernandez Villaverde.

Visto el expediente instruido con motivo de la instancia elevada por Agustin Franco Iglesias, pidiendo indulto de la pena de cadena perpetua que la Audiencia de Caceres le impuso en causa por el delito complejo de robo y homicidio;

Considerando que cumplidos por el reo treinta años de condena, durante los cuales ha observado buena conducta y dado prebas de arrepentimiento, con arreglo á lo prescrito en el art. 29 del Código procede el indulto;

Teniendo presente lo dispuesto en la ley provisional de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejercicio de la gracia de indulto;

De acuerdo con el informe de la Sala sentenciadora, con lo consultado por el Consejo de Estado, y con el parecer de mi Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en indultar á Agustin Franco Iglesias, de la pena de cadena perpetua á que fue condenado en la causa de que va hecho mérito.

Dado en Aranjuez á siete de Junio de mil ochocientos noventa y uno.—Maria Cristina.—El Ministro de Gracia y Justicia, Raimundo Fernandez Villaverde.

Visto el expediente instruido con motivo de la instancia elevada por José Luque Burgos pidiendo indulto de la pena de seis años y un día de presidio mayor que la Audiencia de Sevilla le impuso en causa por el delito de falsedad;

Teniendo en cuenta el móvil del delito, la buena conducta y arrepentimiento del reo, que en concepto del mismo Tribunal sentenciador la pena resulta excesiva, y así se ha considerado en casos análogos y aun idénticos;

Vista la ley provisional de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejercicio de la gracia de indulto;

Tomando en consideración el informe de la Sala sentenciadora, en que se propone la conmutación de la pena por seis meses de arresto; de acuerdo con lo consultado por el Consejo de Estado, y con el parecer de mi Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en conmutar la pena de seis años y un día de presidio mayor á que fue condenado José Luque Burgos por la de dos años y un día de presidio correccional.

Dado en Aranjuez á siete de Junio de mil ochocientos noventa y uno.—Maria Cristina.—El Ministro de Gracia y Justicia, Raimundo Fernandez Villaverde.

Visto el expediente instruido con motivo de la instancia elevada por Maria Alcon pidiendo que se indulte á su esposo Tomas Pallares Alcon de la pena de catorce años, ocho meses y un día de reclusión que la Audiencia de Barcelona le impuso en causa por el delito de homicidio;

Teniendo en cuenta que el reo ha cumplido casi once años de condena, sufrió catorce meses de prisión preventiva, y que, por habérsele condenado posteriormente á seis meses de arresto no se le pudo aplicar ninguno de los Reales decretos de 1880, 1886 y 1890;

Vista la ley provisional de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejercicio de la gracia de indulto;

De acuerdo con el informe de la Sala sentenciadora; con lo consultado por el Consejo de Estado, y con el parecer de mi Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en indultar á Tomas Pallares Alcon del resto de la pena de catorce años, ocho meses y un día de reclusión á que fué condenado en la causa de que va hecho mérito.

Dado en el Real Sitio de Aranjuez á primero de Junio de mil ochocientos noventa y uno.—Maria Cristina.—El Ministro de Gracia y Justicia, Raimundo Fernandez Villaverde.

COMISION PROVINCIAL

En cumplimiento de lo dispuesto por la Instrucción aprobada por Real orden de 9 de Agosto de 1877, esta Comisión en union del señor Comisario de Guerra, acordó fijar los precios que á continuación se expresan, según los cuales deben abonarse á los pueblos de esta provincia, las especies que hayan suministrado á las tropas del Ejér.

